

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por LUZ MARIELA ESPINAL MONTOYA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP- (Radicado 05001-31-05-003-2018-00587-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, al abogado Johan Andrés Cárdenas Boada, con tarjeta profesional No. 301.116 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

**ANTECEDENTES**

Pretende la demandante, previa una serie de declaraciones relacionadas con la muerte de su compañero permanente Luis Eleazar Jaramillo Betancur, se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes con fundamento en lo previsto en la Ley 33 de 1985, mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación y las costas del proceso. De manera subsidiaria se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación post mortem y/o pensión de sobrevivientes por ser beneficiario del régimen de transición y al haber dejado acreditado los requisitos previstos

en la Ley 33 de 1985, a partir de la fecha de su fallecimiento, como los requisitos de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Caja de Crédito Agrario y Minero y Sintracreditario, mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación y las costas. Igualmente de manera subsidiaria, se condene a la UGPP a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación post mortem y/o pensión de sobrevivientes bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, por ser el causante beneficiario del régimen de transición y tener más de 20 años de servicio y 55 años de edad, cumplidos el 4 de abril de 2009, mesadas adicionales, intereses moratorios y/o indexación y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, señala lo siguiente: el 10 de mayo de 2005 falleció su compañero permanente Luis Eleazar Jaramillo Betancur, quien había nacido el 4 de abril de 1954, es decir, que al momento de su fallecimiento contaba con 51 años de edad; éste laboró al servicio de la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A. entre el 8 de mayo y el 17 de junio de 1976, entre el 5 de julio y el 4 de octubre de 1976 y entre el 7 de octubre de 1976 y el 27 de junio de 1999, de los cuales tiene 3 días de interrupción, es decir, que al momento de su muerte contaba con un total de 23 años, 1 mes y 6 días cotizados; conforme a la historia laboral de Colpensiones, la ex empleadora lo afilió a partir del 1 de abril de 1995 y hasta el 30 de junio de 1999, por lo que solo le aparecen 193.44 semanas; de acuerdo a los tiempos certificados por la extinta Caja Agraria, contaba con un poco más de 17 años de servicios al 1° de abril de 1994, situación que lo hace beneficiario del régimen de transición; contrajo nupcias con el señor Luis Eleazar Jaramillo Betancur el 7 de junio de 1978, iniciando convivencia en el Municipio de Ituango, donde permanecieron hasta 1989, pasándose a vivir durante un año al municipio de Dabeiba, y de ahí se fue a vivir a Medellín con sus hijos por razones de estudio, ya que su esposo trabajaba en la Caja Agraria y luego lo trasladaron para el Municipio de Yolombó, pero éste cada 8 días iba a visitarlos, situación que se presentó hasta que falleció; durante la relación matrimonial tuvieron 3 hijos, todos mayores de edad; cuando se acabó la Caja Agraria, inició un negocio de abarrotes y licor entre finales de 2003 e inicios de 2004 en el Municipio de Copacabana y allí tenía un apartamento donde pernoctaba, no obstante, todos los días hablaban por teléfono y ella viajaba los

fin de semana ya que laboraba en Medellín y en cualquier día de la semana los visitaba; la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico se llevó a cabo luego de acabarse la Caja Agraria; su esposo entre los años 2000 y 2003 aproximadamente, al empezar a vender todo, como lo fue la casa en la Milagrosa donde vivía con sus hijos, donde estuvo viviendo desde que se vinieron del Municipio de Dabeiba, así como el carro que tenía en Yolombó y un negocio de zapatos, un amigo de él que trabajaba en una Notaría le aconsejó que hiciera el divorcio de mutuo acuerdo con el fin de afectar una casa que él había comprado en Yolombó para evitar que lo embargaran, pero el bien estaba hipotecado a favor del Departamento de Antioquia; a pesar del divorcio, nunca se separaron y tampoco liquidaron la sociedad conyugal, ya que continuaron viviendo juntos como lo venían haciendo desde que se casaron, así se hubiesen divorciado; estando viviendo en el barrio la Milagrosa de Medellín, su cónyuge llegó en una ocasión y le dijo que él había hipotecado la casa y que se la iban a quitar y por eso la desocuparon y se fueron a vivir al barrio Boston de Medellín, pagando alquiler entre ella y su hija Diana Lucia, y su compañero asumía el costo del mercado y los servicios públicos domiciliarios, situación que se extendió hasta su fallecimiento, momento a partir del cual ella asumió las deudas de él; mientras su esposo trabajó en la Caja Agraria, fue su beneficiaria en salud, y cuando quedó sin empleo se afilió a Cafesalud; en noviembre de 2004 su compañero permanente fue escopolaminado y de ahí empezó enfermo, falleciendo luego por un infarto porque le gustaba mucho el licor y tenía el hígado muy enfermo; fue velado en Campos de Paz y cremado allí mismo, cubriendo los gastos de sepelio la Funeraria Gómez, donde ella lo tenía afiliado; antes de su fallecimiento estuvo hospitalizado entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, y cuando le daban de alta por acuerdo con su suegra y cuñados, se lo llevaban para la casa de su padres en el municipio de Envigado, dado que por razones de trabajo no podía estar con él, quien a su vez no podía permanecer solo, pero de manera continua estuvo acompañándolo entre febrero y mayo de 2005; el 27 de septiembre de 2017 le solicitó a Colpensiones en su condición de compañera permanente la pensión de sobrevivientes, la misma que le fue negada mediante Resolución SUB 251282 del 9 de noviembre de 2017, con el argumento de la existencia de una sentencia en la que se decreta la cesación de efectos civiles por divorcio del matrimonio católico y que no se demostró

que entre la pareja haya existido una convivencia efectiva bajo el mismo techo en calidad de compañeros permanentes, negación que fue confirmada mediante la Resolución SUB 73626 del 17 de marzo de 2018. Presentó solicitud ante la UGPP pretendiendo el pago de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada mediante Resolución RDP 007526 del 20 de febrero de 2016 sin discutir la condición de beneficiaria pero argumentando que el causante no alcanzó la edad de 55 años para ser beneficiario de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo año 1998 1999, suscrita entre la Caja Agraria y Sintracreditario; el Ministerio de Agricultura mediante comunicación refiere que a partir del 15 de diciembre de 2013 la UGPP asumió la obligación de reconocer y pagar las pensiones y cuotas partes que estaban a cargo de la Caja de Crédito Agraria.

Colpensiones dio respuesta oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos dijo que eran ciertos los de la fecha de fallecimiento del causante, el que este haya laborado al servicio de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., el que contrajeron matrimonio y la cesación de efectos civiles del matrimonio católico de la pareja. De los demás dijo que no le constaban. Formuló como excepciones las que denominó: inexistencia de reconocer y pagar la sustitución pensional, improcedencia de reconocer y pagar los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

Por su parte la UGPP atendió de manera oportuna la demanda, oponiéndose igualmente a la prosperidad de las pretensiones. Respecto de los hechos adujo como ciertos los de la fecha tanto de nacimiento como de fallecimiento y la presentación de la solicitud ante la entidad pretendiendo la pensión de sobrevivientes. Negó los que hacen referencia a la convivencia entre la pareja. De los demás dijo que no le constaban. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación y prescripción.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 19 de enero de 2021, DECLARÓ la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Mariela Espinal Montoya en cuanto a la pensión de vejez y

de sobrevivientes por la muerte del señor Luis Eleazar Jaramillo Betancur en contra de Colpensiones y UGPP y, en consecuencia, ABSOLVIÓ a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante. Le impuso las costas a ésta, y fijó como agencias en derecho a favor de las demandadas, la suma de \$100.000 para cada una de ellas.

La Sala conoce del asunto por el grado de consulta.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Ciertamente al interior del proceso no se discute que el señor LUIS ELEAZAR JARAMILLO BETANCUR nació el 4 de abril de 1954 (fl. 53) y falleció el 10 de mayo de 2005 (fl. 56), su matrimonio con la señora Luz Mariela Espinal Montoya el 7 de junio de 1978 (fl. 212), de cuya relación tuvieron tres hijos, todos mayores de edad (fls. 213/214). Tampoco es motivo de controversia que entre los cónyuges hubo una cesación de efectos civiles de matrimonio católico (fls. 219/220). Igualmente, aparece claro que tanto Colpensiones como la UGPP le negaron el derecho pretendido, quien lo reclamó en calidad de compañera permanente.

Viene de lo anterior, que el asunto de marras se circunscribe a determinar, en primera instancia, si a la señora Luz Mariela Espinal Montoya le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes y, de ser necesario, la pensión de jubilación convencional y/o la pensión de sobrevivientes que según sus dichos dejó causada el señor Luis Eleazar Jaramillo Betancur.

El fallador de primer grado para negar las súplicas de la demanda, entre otros argumentos, expresó inicialmente que el señor Luis Eleazar Jaramillo Betancur no tenía cotizaciones en los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento, por lo que no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes con base en la Ley 100 de 1993. No obstante, consideró que el fallecido había cumplido con

los requisitos exigidos para alcanzar la pensión de jubilación contenida en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y “SINTRACREDITARIO” y, por tanto, dejó causado el derecho a la pensión a quien demostrara la calidad de beneficiario, hecho este último que no había sido demostrado por la parte actora al no quedar evidenciada la convivencia con su compañero permanente a sabiendas que se había divorciado del causante y que la misma no había perdurado luego de la separación, hecho que quedó demostrado con los dichos de los testigos arrimados al proceso.

Pues bien, como se sabe, en estos casos, impera la teoría del hecho causante, de acuerdo con ésta, para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes, deben los beneficiarios sujetarse a las normas vigentes al momento del fallecimiento del pensionado o afiliado. Sobre esta materia debe recordarse, siguiendo para el efecto claras directrices establecidas por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que las regulaciones aplicables son las vigentes al momento de la muerte del causante: *“La Corte ha señalado de antaño, que es la fecha del fallecimiento del causante la que determina la normatividad aplicable para efectos del reconocimiento de la prestación de sobrevivencia”* (SL 343-2018).

En el *sub lite*, ello ocurrió el 10 de mayo de 2005, por lo tanto y en principio, los requisitos que deben acreditarse, son los contenidos en la Ley 797 de 2003, en cuyo artículo 12 se prevén dos posibilidades: la primera, según la cual para que haya lugar al derecho en comento, debe constatarse que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso; y la segunda, contenida en el párrafo primero de la disposición aludida, permite el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del afiliado que hubiera sufragado al sistema el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen de prima media para causar una pensión de vejez. Además, se exige que los titulares de esta prerrogativa, no hubieren tramitado, ni disfrutado de una indemnización sustitutiva de la pensión de la vejez.

En ese segundo escenario, el número de semanas que deba dejar cotizadas el causante, dependerá de si era beneficiario o no del régimen de transición, y en caso afirmativo, por supuesto, de con cuál de todos los sistemas anteriores mantuvo una expectativa legítima de consolidar su derecho a la pensión de vejez -(entendiendo que la muerte habilita para estos eventos, el requisito de edad)-, ya que, como lo ha sostenido la jurisprudencia especializada: *“la titularidad a un régimen pensional por vía de transición impone, como mínimo, que se haya estado afiliado a un régimen pensional durante su ordinaria vigencia y que tenga relación con la pensión que se pretende, pues sólo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la particular norma que lo regula exige, el primero de los cuales es, obviamente, que se hubiere tenido la condición de afiliado a dicho régimen, por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo..”* (Puede consultarse la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, SL8639 de 2015).

Así, quien fuere beneficiario de la transición y además del Decreto 758 de 1990, con 500 o 1.000 semanas cotizadas sería suficiente para haber dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes; pero quien no lo fuere, tendrá que haber reportado las semanas exigidas para una prestación por vejez en el Sistema General de Pensiones. En ello, resultan ilustrativas, por exponer semejante postura jurídica a la esbozada en esta providencia, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL17.720 de 2017 y SL379 de 2020.

Con esas precisiones se descende al caso, encontrando que entre el 10 de mayo de 2002 y ese mismo día y mes de 2005 (lapso que constituye los tres años anteriores al óbito de Jaramillo Betancur), el causante no cotizó al sistema ninguna semana, dado que los tiempos de la afiliación al otrora ISS se dieron hasta el 27 de junio de 1999; por consiguiente, no puede pregonarse que proceda la prestación deprecada bajo la primera de las posibilidades previstas en el ya citado artículo 12.

En cuanto a la segunda hipótesis, lo primero que debe determinarse es que la fecha de entrada en vigencia del Sistema General para el fallecido fue el 1º de abril de 1994, porque sus servicios no los prestó para una entidad del orden territorial sino nacional, como la Caja de Crédito Agrario y Minero; lo segundo es que antes de esa fecha no estuvo afiliado al ISS (su primera afiliación ocurrió en el año 1995); y lo tercero es que para la data referida, el fallecido contaba con 39 años 11 meses y 27, pues nació el 4 de abril de 1954, pero tenía como tiempo de servicio más de 15 años.

De allí, si bien es cierto que Luis Eleazar Jaramillo Betancur fue beneficiario del régimen de transición por haber satisfecho los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100, también resulta verídico que su sistema anterior no fue el del Decreto 758 de 1990, pues nunca estuvo afiliado a ese régimen antes del 1º de abril de 1994; eso sí, fue beneficiario de la Ley 71 de 1988, cuerpo normativo que exige para la pensión de jubilación 20 años de tiempo de servicio, los cuales logró reunir, pues quedó demostrado con las probanzas obrantes al interior del plenario que este tiene entre tiempo servido y cotizado como empleado de la Caja de Crédito Agrario y Minero un total de 1187 semanas (fl. 36), dentro de los cuales cotizó a Colpensiones un total de 193 semanas (fl. 22 vto), que equivalen en total a más de 20 años de servicio, norma que le resulta aplicable teniendo en cuenta para ello la postura que adoctrinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia con radicado SL4457-2014, en la que indicó que para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes en aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se deben incluir los tiempos laborados en entidades oficiales sin importar si fue objeto o no de aportes a entidades de previsión o de seguridad social.

En tal línea y según las previsiones del Sistema General de Pensiones, conforme al plurimentado parágrafo, como la muerte ocurrió en 2005, el fallecido dejó acreditados los requisitos para que quienes acrediten la calidad de beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes.

Al respecto, para quien pretenda ser beneficiaria (o) de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia



por un espacio de 5 años con el causante independientemente de que sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido entendiendo por convivencia lo siguiente:

*“Por convivencia ha entendido la Corte que es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605).*

Bajo tales presupuestos, debe analizarse el material probatorio existente al interior del plenario con la finalidad de verificar si la demandante demostró de manera fehaciente la convivencia de manera efectiva con el causante, y siendo que lo pretende en calidad de compañera permanente, este tiempo debe ser en los 5 años inmediatamente anteriores a su muerte.

No desconoce esta Colegiatura la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico llevada a cabo por la pareja Jaramillo Espinal, mediante

sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Familia de Medellín el 16 de julio de 2003, circunstancia esta que en un primer momento le generaría la pérdida del derecho a la causante, como bien lo tiene establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1399-2018.

Sin embargo, tal postura se debe de analizar de manera diferente en situaciones como la acontecida en el presente proceso, en donde luego de la celebración del acto de separación, la demandante sostiene continuó conviviendo con el señor Luis Eleazar, en unidad, prestándose ayuda mutua, continuando con su proyecto de vida hasta el momento de la muerte del causante, dejando claro que no es el tipo o la forma de unión legal o personal la que define el tiempo de convivencia que haya tenido una pareja, sino que es el período de permanencia en la que estuvieron juntos, ayudándose mutuamente, prestándose socorro y ayuda espiritual lo que define la convivencia durante una determinada época, permitiéndose incluso la sumatoria de tiempos consecutivos para demostrar el tiempo mínimo exigido por la norma.

Al respecto, téngase en cuenta lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia con radicado SL5141-2019 68121 MP. RIGOBERTO ECHEVERRY BUENO:

*“En torno a la discusión jurídica planteada por la recurrente, conviene precisar que esta Sala ha indicado que a efectos de verificar el cumplimiento del requisito de la convivencia, el juzgador debe, en cada caso, analizar la vigencia del vínculo marital o conyugal y sus particularidades (ver Sentencia CSJ SL 1399-2018), entendido este, más allá de la mera denominación formal que en el derecho de familia se le otorgue (matrimonial, unión marital, sociedad conyugal, sociedad patrimonial, etc), o de eventos donde existan separaciones de cuerpos transitorias, «en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares», pues lo que a efectos de la protección del derecho de la seguridad social incumbe, es demostrar si entre la pareja perduraron esos «lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos*

*esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja» (ver Sentencia CSJ SL 1399-2018).*

*Por lo indicado, en casos de cónyuges «separados de hecho» o incluso «con sociedad conyugal liquidada» (CSJ SL, 25 abr. 2018, rad. 45779), esta sala ha precisado que no resulta relevante la clasificación o estatus que en el derecho de familia adopte la unión de la pareja, pues se itera, lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, es la perdurabilidad, de manera patente, de la «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva (...)» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; SL7299-2015; SL1399-2018); además de concederle una protección al cónyuge supérstite que «entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión [y] se ve desprovista del sostén que aquel le proporcionaba» (sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637), ello precisamente, en virtud del principio de solidaridad del que es partícipe el derecho a la seguridad social.*

*Tal postura toma más fuerza si con posterioridad a la separación o a la liquidación de la sociedad conyugal, además de persistir esa comunidad de vida, no existió una convivencia simultánea con otro compañero permanente, y si quien invoca la concesión de la prestación se ve desprovista de todo sustento ante del fallecimiento pensionado. En sentencia CSJ SL 1399-2018, esta Sala coligió:*

*(...)*

*(i) el legislador de 2003 tuvo en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe*

*tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a) permanente.*

*Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho.*

*En concordancia con los argumentos previamente esbozados, encuentra la Sala que, tal y como lo advierte el censor, el Tribunal le dio un errado entendimiento al contenido del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al concluir que los 5 años de convivencia exigidos por la norma solo podían demostrarse bajo una de las dos calidades, bien como cónyuge o bien como compañera permanente, pero no con acumulación de tiempos convividos bajo diferente estatus. Esa comprensión de la norma resulta ser restrictiva y rigurosa, además de contrariar el querer del legislador que, se itera, propende por la protección de esa unión más allá de la mera formalidad, así como del principio de solidaridad con el cónyuge o compañero supérstite.*

*En otros términos, no es adecuado atar ni reducir el requisito de convivencia y, por ende, la prosperidad del derecho de sobrevivientes, simplemente a la calidad formal de cónyuge o compañero de quien arguye ser beneficiario, ni tampoco a figuras jurídicas o situaciones de hecho que, prima facie, pudieran reflejar la extinción del vínculo formal pero que en el trasfondo revelen la voluntad de las partes de continuar con su vida de pareja, pues, se itera, es necesario que el juzgador, en cada caso concreto, ausculte más allá del vínculo jurídico existente, a fin de determinar si existe una convivencia efectiva, real y material, pues es esta la que se requiere a efectos de acreditar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes.”*

Así las cosas, luego del respectivo análisis, especialmente de la prueba testimonial, no le queda duda a esta Corporación que entre la pareja Jaramillo Espinal no existió una convivencia verdadera, real y efectiva durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del señor Luis Eleazar, que es el término exigido por la norma para los casos como el aquí debatido.

Y es que para esta Sala de Decisión existen serias y razonables dudas que efectivamente se haya presentado alguna convivencia en la referida pareja, por cuanto las probanzas obrantes al interior del proceso permiten concluir que entre ellos lo que se presentó fueron actos por la existencia previa de un matrimonio respecto del cual se declaró la cesación de los efectos civiles y la existencia de hijos de por medio, más no unos que puedan llevar a concluir la calidad de compañeros permanentes, por cuanto para que se pueda hablar de esta última no debe quedar duda que entre la pareja hubo singularidad en la relación, a más de acompañamiento en techo, lecho y mesa, todo con el firme propósito de conformar una familia, elementos estos que brillan por su ausencia en el material probatorio allegado a las diligencias.

Se dice lo anterior por cuanto revisados los testimonios allegados, lo que se evidencia, se repite, es que no hubo una real y efectiva convivencia entre la pareja Jaramillo Espinal en calidad de compañeros permanentes que es lo que pretende demostrar la demandante, y que si bien pudo haberse presentado alguna relación, acercamiento o comunicación entre ellos, esto se dio por el carácter de ex esposos, o posiblemente de la existencia de algún sentimiento entre ellos, pero no el de una pareja que tiene como finalidad el de formar una familia con el ánimo de permanencia y unidad.

A tal conclusión se llega por cuanto analizadas las declaraciones de la hermana y del hermano del causante no se puede deducir la convivencia referida, pues el señor Jesús María dijo que vive en el Municipio de Ituango, no fue nunca a la casa de habitación de su hermano, sabía que este tenía una tienda pero fue porque otro hermano se lo contó, no supo si la señora Mariela fue a visitarlo al hospital porque las dos veces que él estuvo no la vio a ella allá, y que al momento de su hermano enfermarse vivía en la tienda que tenía en Copacabana y que no sabe si la demandante lo visitaba en ese sitio; en similares términos la señora Rosa, quien adujo que vivió en el Municipio de Santa Bárbara, que su hermano vivía en el barrio Boston y que iba todos los días a su casa, que cuando su hermano se enfermó la señora Mariela iba a cuidarlos al hospital y que no los visitaba tanto porque vivía en otro municipio.

En cuanto al testimonio de la señora Luz Edith Cáceres Montes nada hay por decir por cuanto ella misma refirió que no tiene ningún conocimiento de la relación de pareja, que lo único que conoce es de la muerte del señor Luis Eleazar porque la demandante era su trabajadora y se lo contó.

De la referida prueba testimonial arrimada, no resta sino hacer referencia al señor Jaime de Jesús Tabasco, quien era la persona que compartía la propiedad de un negocio del señor Jaramillo Betancur y luego le compró la otra parte al momento en que este se enfermó, aduciendo en sus dichos que conocía a la pareja desde el año 1976 porque trabajó con éste un tiempo en la Caja Agraria, pero que él no visitaba la casa de la pareja, asegurando que el causante tenía una pieza en el local y allí dormía; que sabía que el señor Jaramillo iba los martes y miércoles a visitar la casa de la señora Mariela y que esta iba los fines de semana donde él, que siempre los conoció como esposos sin que especificara dentro de su declaración si entre ellos se presentaba alguna ayuda de tipo económico, espiritual o de socorro o ayuda mutua, a más que de sus dichos se desprende que no hubo una relación continúa sino que eran más bien de visitas esporádicas, sin que las mismas representen unidad y permanencia en el tiempo como grupo familiar. Sobre esto dicho, téngase en cuenta que los deponentes sustentan sus dichos más por lo que les contaban que por lo que ellos mismos pudieran percibir directamente, pues todos son contestes al señalar que nunca visitaron la casa de la pareja, por lo que quedan sus afirmaciones sujetas a lo que otros le contaron, restándole de alguna manera tal situación valor a sus argumentos.

Frente a las declaraciones extra juicio obrantes en el plenario, debe decirse que las mismas adquieren el carácter de prueba testimonial, las que al revisarlas se encuentran serias contradicciones como lo es la de la señora Rosa Margarita Jaramillo de Uribe quien en la misma señaló que la cesación de los efectos civiles “...*fue meramente formal...*”, y en el testimonio rendido al interior del proceso refirió que no sabía que su hermano se había divorciado; a más de eso los demás hacen referencia a los asuntos de la pareja de manera general señalando que conocieron a la pareja compartiendo techo, lecho y

mesa, cuando resulta evidente que la relación de pareja no estuvo regida por tales condiciones.

No desconoce esta Corporación que pueden existir eventos en los cuales las familias por diferentes circunstancias se ven obligadas por cuestiones económicas, de salud o cualquier otra naturaleza a mantener una relación de pareja con separación de cuerpos, pero existiendo el vínculo respecto de la ayuda mutua, el socorro, el acompañamiento que es lo que se debe pregonar para la demostración de la convivencia con fines de acceder como beneficiaria a una pensión de sobrevivientes, elementos estos que brillan por su ausencia en el presente asunto.

Se debe dejar claro que al no quedar demostrada la convivencia por parte de la señora Luz Mariela Espinal Montoya en los términos descritos por la jurisprudencia, se hace innecesario abordar la pretensión subsidiaria, por cuanto tal demostración resultaría igualmente relevante en el caso de que el afiliado fallecido haya dejado causado la pensión de jubilación convencional suscrita entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y “SINTRACREDITARIO”, como lo adujo el juez de instancia.

En conclusión, y sin necesidad de otros razonamientos, habrá lugar a confirmarse la sentencia venida en consulta, incluido lo relativo a las costas. Sin costas en esta instancia dada la manera como se conoce del asunto.

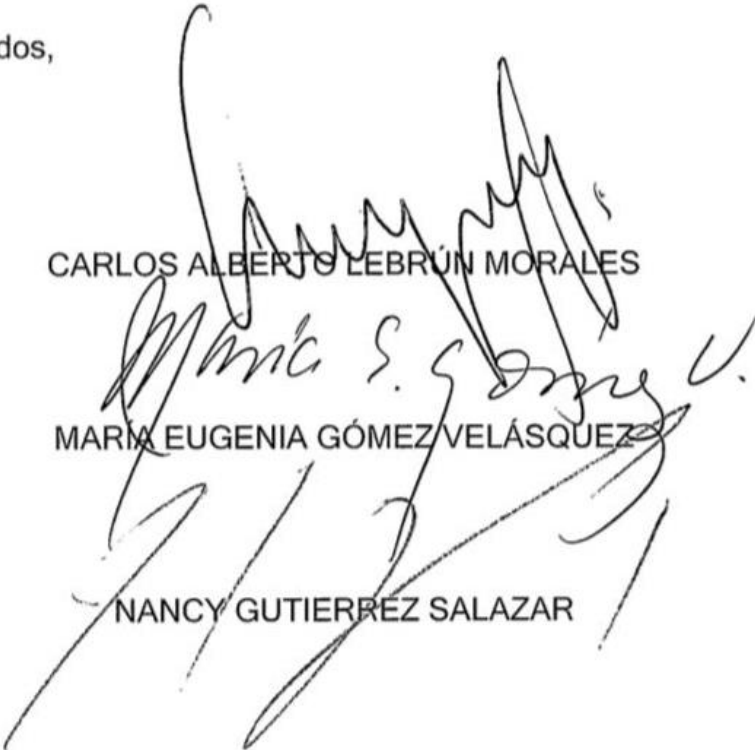
#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de consulta, incluido lo relativo a costas.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con la decisión de la CSJ, AL2550-2021).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310500320180058701  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** LUZ MARIELA ESPINAL MONTOYA  
**Demandado:** COLPENSIONES Y UGPP  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 19/07/2022  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario